



REPÚBLICA ARGENTINA  
**VERSIÓN TAQUIGRÁFICA**

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Período 134°

**8ª Reunión - 2ª Sesión ordinaria - 8 de junio de 2016**

Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, Lic. **Marta Gabriela Michetti**,  
y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador D. **Juan Carlos Marino**

Secretarios: señor D. **Juan Pedro Tunessi** y señor D. **Helio Rebot**

Prosecretarios: señor D. **Mario Daniele**, señor D. **Eric Calcagno y Maillmann** y señor  
D. **Ángel Torres**

---

**PRESENTES:**

ABAL MEDINA, Juan Manuel  
AGUILAR, Eduardo Alberto  
AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia  
ALMIRÓN, Ana Claudia.  
ALPEROVICH, José Jorge  
BARRIONUEVO, Walter Basilio  
BASUALDO, Roberto Gustavo  
BLAS, Inés Imelda  
BOYADJIAN, Miriam Ruth  
BRAILLARD POCCARD, Néstor  
CABRAL ARRECHEA, Salvador  
CASERIO, Carlos  
CASTILLO, Oscar Aníbal  
CATALÁN MAGNI, Julio César  
COBOS, Julio César Cleto  
DE ANGELI, Alfredo  
DE LA ROSA, María Graciela  
DURANGO, Norma  
ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz  
FELLNER, Liliana Beatriz  
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel  
FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle  
FUENTES, Marcelo Jorge  
GARCÍA, Virginia María  
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela  
GIMÉNEZ, Sandra Daniela  
GODOY, Ruperto Eduardo  
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel  
IRRAZÁBAL, Juan Manuel  
ITURREZ DE CAPPELLINI, Ada del Valle  
KUNATH, Sigrid Elisabeth  
LABADO, María Esther  
LINARES, Jaime  
LUENZO, Alfredo  
LUNA, Mirtha María Teresita  
MARINO, Juan Carlos  
MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo  
MARTÍNEZ, Ernesto Félix  
MAYANS, José Miguel Ángel  
MERA, Dalmacio

MIRKIN, Beatriz.  
MONTENEGRO, Gerardo Antenor  
ODARDA, María Magdalena  
OJEDA, José Antonio  
PEREYRA, Guillermo Juan  
PEROTTI, Omar  
PÉRSICO, Daniel Raúl  
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos  
PICHETTO, Miguel Ángel  
PILATTI VERGARA, María Inés  
REUTEMANN, Carlos Alberto  
RIOFRÍO, Marina Raquel  
RODRÍGUEZ MACHADO, Laura  
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo  
ROMERO, Juan Carlos  
ROZAS, Ángel  
SACNUN, María de los Ángeles  
SOLANAS, Fernando Ezequiel  
URTUBEY, Rodolfo Julio  
VARELA, Marta Lucía  
VERASAY, Pamela Fernanda

**AUSENTES, CON AVISO:**

GONZÁLEZ, Nancy  
MENEM, Carlos Saúl  
ZAMORA, Gerardo

**AUSENTE POR MATERNIDAD:**

LEGUIZAMÓN, María Laura

**EN COMISIÓN:**

CREXELL, Lucila  
ESPÍNOLA, Carlos  
GIACOPPO, Silvia del Rosario  
LOVERA, Daniel  
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita  
PAIS, Juan M.  
PINEDO, Federico

## SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional.
2. Aprobación de versiones taquigráficas.
3. Asuntos entrados.
4. Acuerdos.

Solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, Neuquén, a la doctora María Silvina Domínguez. (O.D. N° 271/16.)

Solicita acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Federal de la Seguridad Social Fiscalía N° 2, al doctor Juan Carlos Paulucci. (O.D. N° 272/16.)

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, al capitán de navío de la Armada Eduardo Luis Malchiodi. (O.D. N° 273/16.)

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, al teniente coronel del Ejército Hugo Luis Gaillard. (O.D. N° 274/16.)

Solicita acuerdo para oficiales superiores que fueron designados jefes del Estado Mayor Conjunto y de los estados mayores generales de las Fuerzas Armadas. (O.D. N° 275/16.)
5. Plan de labor.
6. Régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado por compras en comercios minoristas. (O.D. N° 270/16.)
7. Entrega voluntaria de armas de fuego. (O.D. N° 43/16.)
8. Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. (O.D. N° 238/16.)
9. Ley de academias nacionales. (O.D. N° 30/16.)
10. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley.

Declara monumento histórico nacional al edificio que fue sede de la Intendencia del Parque Nacional Lanín. (O.D. N° 76/16.)

Declara bien histórico nacional a la Escuela Provincial N° 1 “Hernando de Magallanes”. (O.D. N° 77/16.)

Declara bien histórico-artístico a las esculturas alegóricas al trabajo realizadas por Lola Mora. (O.D. N° 96/16.)

Programa Nacional Educativo de Concientización sobre el Síndrome de Down. (O.D. N° 97/16.)

Declara bien histórico nacional al puente basculante ferrocarrilero sobre el curso inferior del río Negro. (O.D. N° 98/16.)

Declara árbol histórico nacional al Algarrobo Abuelo. (O.D. N° 99/16.)

Declara Capital Nacional del Fútbol Infantil a la ciudad de Sunchales, Santa Fe. (O.D. N° 118/16.)

Declara Capital Nacional de Pelota a Paleta a la localidad de Venado Tuerto, Santa Fe. (O.D. N° 119/16.)

Declara Capital Nacional del Tétratlón a la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén. (O.D. N° 128/16.)

Día Nacional del Profesor de Tenis. (O.D. N° 129/16.)

Día Nacional del Deportista Trasplantado. (O.D. N° 131/16.)

Declara Capital Nacional del Buceo y las Actividades Subacuáticas a Puerto Madryn, Chubut. (O.D. N° 241/16.)
11. Manifestaciones.
12. Incorporación del feriado nacional no laborable, en conmemoración del paso a la inmortalidad del general don Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio de cada año. (C.D.-127/15.)

---

18. Apéndice<sup>1</sup>.

- Actas de votación.
  - Plan de labor.
  - Asuntos entrados.
  - Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
  - Inserciones.
- 

---

<sup>1</sup> El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos durante el desarrollo de la sesión. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en la versión impresa del Diario de Sesiones.

---

- *En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 53 del miércoles 8 de junio de 2016:*

**Sra. Presidente.-** Vamos a dar comienzo, entonces, a la sesión. La sesión está abierta.

## **1. Izamiento de la bandera nacional**

**Sra. Presidente.-** Invito al señor senador Alfredo Héctor Luenzo a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

- *Puestos de pie los presentes, el señor senador Alfredo Héctor Luenzo procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)*

## **2. Aprobación de versiones taquigráficas**

**Sra. Presidente.-** De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración las versiones taquigráficas correspondientes al presente período, que seguidamente por Secretaría se indicarán, las que se encuentran publicadas en la web oficial del Honorable Senado de la Nación.

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Versiones taquigráficas correspondientes el Período Legislativo 134: 2ª Reunión, 1ª Sesión ordinaria, de fecha 9 de marzo de 2016; 3ª Reunión, 1ª Sesión especial, de fecha 30 de marzo de 2016; 4ª Reunión, 2ª Sesión especial, del 27 de abril de 2016; 5ª Reunión, 3ª Sesión especial, del 18 de mayo de 2016; 6ª Reunión, 4ª Sesión especial, del 1º de junio de 2016; 7ª Reunión, 5ª Sesión especial, del 1º de junio de 2016.

**Sra. Presidente.-** Si no hay observaciones, procedemos a la votación.

- *Se practica la votación a mano alzada.*

**Sra. Presidente.-** Quedan aprobadas las versiones taquigráficas leídas por Secretaría<sup>2</sup>.

## **3. Asuntos entrados**

**Sra. Presidente.-** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes<sup>3</sup>.

Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo, a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de este Honorable Senado<sup>4</sup>.

Asimismo, se solicita prestar anuencia para el retiro de un mensaje del Poder Ejecutivo solicitando prestar un acuerdo.

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Mensaje N° 731/16 solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales Criminal Federal de Mendoza, provincia de Mendoza, Defensoría N° 1, al doctor Juan Ignacio Pérez Curci; mensaje N° 744/16, solicitando acuerdo para designar fiscal de Investigaciones Administrativas, al doctor José Miguel Ipohorski Lenkiewicz; mensaje N° 745/16, solicitando acuerdo para

---

<sup>2</sup> Ver el Apéndice.

<sup>3</sup> Ver el Apéndice.

<sup>4</sup> Ver el Apéndice.

Nº 275/16.)

- *Se practica la votación a mano alzada.*

**Sra. Presidente.-** Aprobado.

Tiene la palabra la señora senadora Labado.

**Sra. Labado.-** Quiero dejar constancia de mi voto negativo en el Orden del Día Nº 272/16.

**Sr. Godoy.-** Yo también dejo constancia de mi voto negativo para el Orden del Día Nº 272/16.

**Sra. Luna.-** Yo también dejo constancia de mi voto negativo en el Orden del Día Nº 272/16.

**Sra. Presidente.-** Okey. Se deja constancia.

El senador Ruperto Godoy y la senadora Mirtha María Teresita Luna también dejan constancia de su voto negativo en el mismo Orden del Día.

## 5. Plan de labor

**Sra. Presidente.-** Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado en el día de ayer<sup>6</sup>.

Corresponde proceder a su votación. Votamos el plan de labor.

- *Se practica la votación a mano alzada.*

**Sra. Presidente.-** Aprobado.

## 6. Régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado por compras en comercios minoristas (O.D. Nº 270/16.)

**Sra. Presidente.-** Corresponde pasar a la consideración del Orden del Día que por Secretaría se enunciará.

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Orden del Día Nº 270/16: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se establece un régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado por compras en comercios de venta minorista. (C.D.- 18/16.)

**Sra. Presidente.-** Se pone el proyecto en consideración del cuerpo.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Abal Medina.-** Gracias, presidenta.

Como decía el secretario, estamos tratando el Orden del Día Nº 270/16, C.D.- 18/16, que tiene como título “Proyecto de ley que contempla un régimen de reintegro por compras en comercios minoristas y el uso de los mecanismos que permiten pagar con tarjeta tipo Posnet”. Obviamente, es el proyecto que todos conocemos como de devolución del impuesto al valor agregado.

En primer lugar, quiero agradecer a los miembros del Ejecutivo que vinieron a la comisión, particularmente al doctor Alberto Abad; a la Subsecretaría de Ingresos Públicos y al vicepresidente del Banco Central.

En este sentido, quiero presentar un proyecto que tiene, básicamente, tres objetivos: en primer lugar, bajar la presión tributaria en los sectores más vulnerables de la Argentina. En segundo lugar, empezar a transitar un camino hacia un régimen impositivo más progresivo que el del impuesto al valor agregado, que es histórica y fuertemente regresivo en relación a los sectores de menores recursos, continuando la

---

<sup>6</sup> Ver el Apéndice.

formalización de la economía.

El proyecto está separado en dos grandes títulos: el primero se refiere específicamente a la técnica de la evolución de una proporción del impuesto al valor agregado. Y el segundo está relacionado a la implementación, básicamente a la utilización masiva de las tarjetas de débito y al régimen del Posnet.

¿Quiénes son los beneficiarios de esta iniciativa...

**Sra. Presidente.-** Por favor, les pido que hagamos silencio, particularmente a la gente que está en los pasillos.

**Sr. Abal Medina.-** Gracias, presidenta.

¿Quiénes son los beneficiarios de esta iniciativa? Se está estimando aproximadamente 9.200.000 beneficiarios. Estamos hablando de 3.600.000 jubilados y pensionados con la jubilación o la pensión mínima; 1.500.000 de beneficiarios de pensiones no contributivas mínimas; aproximadamente 4 millones de asignaciones universales por hijo –porque es una por beneficiario– y más o menos 100.000 de asignación universal por embarazo.

¿Qué es lo que contempla concretamente el proyecto? Establece un reintegro de un monto equivalente no menor al 15 % de la compra con un tope de 300 pesos mensuales. Esta cifra tiene carácter transitorio hasta tanto el INDEC no publique una canasta básica de alimentos. Al mismo tiempo, dicho monto es actualizado dos veces por año: en julio y en enero.

El pago debe efectuarse con tarjetas de débito habilitadas para la acreditación en beneficios laborales, asistenciales o de seguridad social, incluyendo tarjetas prepagas no bancarias.

¿Quiénes quedan momentáneamente, por ahora, excluidos de este beneficio? Aquellos que pagan bienes personales, los que tributan el impuesto a las ganancias y los que perciben ingresos en relación de dependencia. Se establece un tope de 2,5 jubilaciones mínimas para que lo cobre la familia.

**Sr. Pichetto.-** ¡No paran de caminar ahí!

**Sra. Presidente.-** Sí, estaba viendo lo mismo. Tiene razón.

**Sr. Pichetto.-** ¡A ver! ¿Por qué no para esto?!

**Sra. Presidente.-** ¡Por favor! Recién dije que, por favor, la gente que está en el pasillo y en la puerta estén ordenados.

**Sr. Pichetto.-** ¡Entra y sale gente!

**Sra. Presidente.-** Absolutamente. Tiene razón.

**Sr. Abal Medina.-** Obviamente, de manera complementaria, pero central para llevar este proyecto adelante, se establece la obligatoriedad de aceptar los medios de pago electrónicos: las tarjetas de débito, las prepagas no bancarias y otros mecanismos que se establezcan al respecto.

Este objetivo significa que los contribuyentes inscriptos en el impuesto al valor agregado podrán computarlo en términos de crédito fiscal. De esta manera, el Estado se hace cargo de ese pago. Y en aquellos casos que tienen el monotributo, el Ejecutivo deberá implementar la forma de hacer que esta cuestión se vuelva gratuita.

Es obvio que se prevén varias cuestiones en el Título IV, Disposiciones Transitorias, para garantizar que mientras se esté implementando este proceso, que tiene una complejidad técnica bastante importante –porque requiere del trabajo de varias agencias en sintonía–, todos los sectores puedan ir teniendo este beneficio, a partir de unas modificaciones básicas en cada caso.

Se trata de un proyecto que tiene un costo fiscal bastante importante. Estamos hablando de aproximadamente –se supone– 9.200.000 beneficiarios. Estamos pensando

en aproximadamente 30.000 millones por año. Para que tengamos una idea, por ejemplo, habrá un menor ingreso en la ANSES de 3.300 millones; y en el resto, que es coparticipable, significaría un menor ingreso por parte de la Nación de 11.300 millones y 15.100 millones por parte de las provincias. Es decir, es una medida significativa.

En términos generales, como decía al principio, yendo de menor a mayor, me parece un proyecto importante porque fomenta el blanqueo y la formalización de la economía. Como todos sabemos, es una de las cuestiones centrales para ir ampliando el espacio de lo que se tributa en nuestro país y hacer un sistema más justo.

En segundo lugar, como también dije al principio, es un proyecto que hace menos regresiva una estructura tributaria como la de Argentina, que lo sigue siendo y mucho; y especialmente con un impuesto como este, en el que más pagan los que menos tienen. Como todos sabemos bien, el porcentaje que pagan de impuesto al valor agregado los sectores de menos recursos, especialmente en alimentos, es mucho más alto que el otro tipo de sectores.

En tercer lugar, creo que aún más importante que lo anterior –en un momento como este, en el que hay muchos sectores de la Argentina y muchos compatriotas que están viviendo una situación enormemente compleja por el tema tarifario y los aumentos de precios–, es que este proyecto establece un beneficio limitado y puntual más que importante para transitar este difícil momento.

Si me permiten y sin ningún ánimo de confrontación, quiero decir, como lo hemos señalado muchas veces en este bloque, frente a un gobierno nacional que muchas veces parece tener dos velocidades y que es bastante más rápido para hacer las medidas que benefician a los que más tienen y, a veces, bastante más lento para los que menos tienen, sin duda, este proyecto es una buena noticia y está muy bien que hoy le podamos dar sanción y pedirle al Ejecutivo que lo implemente con la máxima brevedad posible.

Muchas gracias.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.

**Sra. Elías de Perez.-** La verdad es que es una enorme emoción sentir que el miembro informante, que es de la oposición, defiende este proyecto con la misma energía que lo defendemos nosotros. Ya ha pasado a ser un proyecto de todos. Tan así es que, en la Cámara de Diputados, a pesar de que la iniciativa viene desde nuestro Poder Ejecutivo, tiene más de diez o doce aportes que han hecho las distintas bancadas.

Tal como lo decía el senador Abal Medina, este proyecto se refiere al reintegro del 15 % del impuesto al valor agregado hasta un monto de 300 pesos por todas las compras que se hagan por bienes muebles, tanto en comercios minoristas como en mayoristas que vendan por menor.

Lo importante aquí es que, si nosotros hacemos una retrospectiva y vemos la historia de este impuesto, observaremos que allá en 1973 apareció justamente para dejar sin efecto otra serie de impuestos que gravaban a los ingresos y que producían un efecto en cascada enorme.

Cuando se instrumentó la primera etapa de devolución del impuesto al valor agregado no alcanzaba a la canasta básica. Pero después, año tras año, se impulsaron una serie enorme de reformas que hicieron que se extendiera a la canasta de alimentos; después, se disminuyó la alícuota; se subió la alícuota; luego, se establecieron alícuotas diferenciales. Sin embargo, en todos estos casos nunca alcanzó a las clases de menores ingresos o que realmente necesitaban mayor ayuda por parte del Estado.

En esta oportunidad, lo que estamos haciendo es corregir esto. Creo que desde hace dos años desde todos los bloques han ido surgiendo distintos proyectos que

apuntaban en el mismo sentido: dejar sin el impuesto al valor agregado a la canasta básica.

¿Qué es lo que hacemos ahora? Damos un primer paso. El primer paso es que sean alcanzados por este reintegro del 15 %, hasta los 300 pesos, los jubilados y pensionados que cobran la mínima y aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo.

La verdad es que la medida es enorme, inmensa, porque la población alcanzada es de 9.200.000 personas, lo que significa 9.200.000 familias. Esto no es menor; máxime si cuando hablamos de la Asignación Universal por Hijo no es solamente una por persona, sino una por Asignación Universal por Hijo. Por ejemplo, a una familia que tiene tres niños y recibe la Asignación Universal por Hijo se le reintegrará por cada una de las asignaciones, o sea por un tope de 900 pesos mensuales, lo cual es más que importante.

La clave es ver cómo se calcula. Se calcula sobre las ventas que se hagan y sean pagadas con tarjetas de débito, tarjetas prepagas u otros medios electrónicos. Esto último se agregó para que los medios electrónicos que puedan surgir en el futuro estén perfectamente alcanzados. El 15 % de este reintegro se acredita en la cuenta que tiene cada uno de los beneficiarios.

Para poder llevar adelante esto, la ANSES ya tiene la base de datos de beneficiarios alcanzados, la cual se cruza con la AFIP. En ese sentido, ¿qué es lo que se ha dispuesto también? Que aquellas personas que pagan bienes personales –porque pueden llegar a tener una jubilación mínima, pero además pagar bienes personales; o sea, no estar en la escala a la que hoy se está tratando de alcanzar y de ayudar– quedan excluidas. Por lo tanto, de las dos bases de datos que se cruzan –reitero, la de la ANSES y la de la AFIP– salen los verdaderos beneficiados, que son los que pasan directamente a la procesadora.

También es importante aclarar que la ley establece para los negocios la obligatoriedad de recibir y tener el Posnet necesario para realizar estas operaciones. Muchos nos dicen: “Bueno, pero no todos los negocios de cercanía lo tienen”. Al respecto, hace dos días nos dieron la buena noticia desde el Banco Central de que ya está listo el *software* a través del cual todos los teléfonos podrán transformarse en Posnet, para que realmente no haya dificultades en la implementación de esta norma. Sencillamente, mediante un dispositivo podrán pasarse las tarjetas a través de los propios teléfonos.

Además, la ley establece que será gratuita la instalación de los Posnet; no habrá costos adicionales. Ese costo será tomado como crédito en el pago del impuesto al valor agregado. Por otro lado, tampoco habrá costos transaccionales. Actualmente, ustedes saben que el costo bancario de cada una de las transacciones que se hacen es del 1,5. Pero este tipo de transacciones –la ley lo dice específicamente– no tendrán un costo transaccional. A esto hay que sumar que la AFIP tampoco hará las retenciones, pagos a cuenta o exacciones por estas compras; por lo tanto, tendrán un costo cero.

Hay que tener en cuenta los siguientes datos para ver la magnitud de lo que estamos votando. El impuesto al valor agregado ha pasado, en este último tramo, de representar el 5,8 del producto bruto interno a significar el 7,5. La medida que hoy estamos por sancionar implica medio punto del producto bruto interno.

Y esto no es menor y, como decía el senador Abal Medina, cuando se alcance toda la población a la que está dirigida, representará unos 30.000 millones de pesos que van a ser destinados a los que menos tienen.



Esto es absolutamente importante, tanto que sería bueno darnos cuenta de que si anualizáramos la medida, lo que se hará es pagar un aguinaldo más a nuestros mayores con jubilación mínima y unas 2,5 veces más la Asignación Universal por Hijo.

En el Capítulo 3 se alude a una campaña de educación y de difusión. Y permítanme una digresión.

Hace pocos días, estaba con una vecina que tiene 104 años. Ella está mejor que todos nosotros. Tiene esa suerte. Posee una lucidez absoluta. Es de las que todavía se pinta y se viste muy lindo para hacer las compras. Le contaba a Carmen de todas estas cosas y ella me preguntaba fundamentalmente por la ley de reparación. Además, a partir de eso, aprovechaba para contarle lo del reintegro. En ese momento iba con uno de mis hijos y él le decía que iba a tener que aprender cómo se usa la tarjeta de débito y si se iba a acostumbrar o no ya que era algo que habíamos discutido. Y la verdad es que lo que Carmencita me respondió, y yo lo quiero compartir con ustedes, es que en estos cien años vio una cantidad de cambios que nosotros no experimentamos. Por ejemplo, el paso del coche de plaza al auto, a descubrir que existía algo como la televisión y los teléfonos. Así es como todos hemos ido aprendiendo. En realidad, el problema no tiene que ver con la edad sino con que nosotros no tenemos paciencia para enseñarles.

Como estas cosas suelen pasar a veces, es que me parece muy bien que en el Capítulo 3 se haya incorporado la realización de una campaña de educación y de difusión, que no consistirá solamente en publicidad, sino que se trabajará con los centros de jubilados para que lleguen a entender perfectamente cómo funcionarán las compras con el Posnet. Además, hay un régimen sancionatorio para los comercios que no cumplan con tener este nuevo método de compra.

Por otro lado, en el último capítulo, para ayudar al cambio de hábito en el modo de compra por parte de las personas mayores, se ha colocado una disposición transitoria por la cual en la primera y segunda compra se les va a devolver 150 pesos por compra. Y, además, se extiende a los seis primeros meses, en una devolución que irá de los 75 pesos por compra a los 50 pesos por compra.

Señora presidente: esto, sumado a la extensión de la Asignación Universal por Hijo, a la ley de reparación histórica para los jubilados, a la ley del primer empleo y al incentivo a las pymes, francamente, es un enorme estímulo a favor de los que menos tienen, a favor del trabajo y a favor de la reactivación que impulsa nuestro gobierno.

Es por ello que les pedimos a todos los senadores que nos apoyen con la sanción de la norma en consideración.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra la señora senadora Durango.

**Sra. Durango.-** Señora presidente: está en tratamiento una iniciativa cuyos objetivos también compartimos en la medida en que procura generar un beneficio para los sectores de menores ingresos como los jubilados que cobran la mínima y los beneficiarios que cobran la Asignación Universal por Hijo y en tanto compensa los efectos del incremento significativo en los precios y, particularmente, en la canasta básica.

Sin ánimo de ser pesimista, es necesario recalcar que creemos que la eficacia de la aplicación deberá estar acompañada de un gran esfuerzo en función de la bancarización que exige tanto para los comercios como para los beneficiarios de la medida. No obstante ello, creemos que es una iniciativa que va en la dirección correcta.

Ahora bien, tratándose de los tributos cuya recaudación es coparticipable, no podemos dejar de alertar sobre el impacto que tendrá el costo del beneficio en las fatigadas arcas de las provincias. Por ejemplo, la de La Pampa, que es la que represento.

La afectación que producirá el efecto de la norma será de tal magnitud que, en el caso de mi provincia, al menos, tornará estéril la restitución del 15 % de la coparticipación negociada con el Estado nacional hace unos días.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda ubican su costo fiscal en unos 30.000 millones. Y dado que la mengua de dicha recaudación será soportada en un monto aproximado a la mitad por el conjunto de los erarios provinciales, el impacto repercutirá directamente sobre nuestras finanzas provinciales.

En síntesis, creemos que la medida implementada es justa, pero con la misma convicción entendemos que el costo fiscal que genera debe ser absorbido por el Tesoro nacional.

Por eso propondremos, entre hoy y mañana, con varias senadoras y con varios senadores, un proyecto de ley que contemple que los beneficios establecidos en la presente iniciativa se financien con recursos del Tesoro nacional.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra el señor senador Rozas.

**Sr. Rozas.-** Señora presidente: seré muy breve, porque creo que tanto el senador Abal Medina como la senadora Elías de Perez, quienes informaron por ambos bloques, han sido suficientemente explícitos y claros sobre los fundamentos técnicos, políticos y sociales de este proyecto.

Simplemente he pedido la palabra porque fui autor de un proyecto similar apenas asumí la banca de senador y porque en mi campaña a senador nacional por mi provincia uno de los proyectos con los cual hice campaña fue, precisamente, el tendiente a bajar o a quitar el impuesto al valor agregado a la canasta básica alimentaria.

Realmente, siempre pensé y creí que es absolutamente injusto que pagásemos sobre esa canasta alimentaria todas las familias argentinas el mismo porcentaje. Porque hay un tema que seguramente cuando uno lee o analiza quizá pasa por alto. O sea, que ese 21 % no impacta en todas las familias de manera igualitaria. Porque si el ingreso de alguien es de 50.000; 40.000; 30.000; o 20.000 pesos, no gastará seguramente la totalidad de ese dinero en la canasta básica alimentaria. En cambio, las clases populares, que aquí se indican como beneficiarias –quienes reciben una asignación universal por hijo; o por embarazo; las pensiones no contributivas; las jubilaciones y pensiones con haberes mínimos– prácticamente gastan la totalidad de lo que perciben como ingreso en alimentos de la canasta básica.

Entonces, es un acto de estricta justicia social esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que por eso tuvo acompañamiento en la Cámara de Diputados y seguramente lo tendrá aquí. Me imagino de manera total.

Y quiero decir que me siento sinceramente muy satisfecho, porque es un acto de estricta justicia social y porque también pertenezco al gobierno de Cambiemos y creo que está claro que hay muchas medidas sociales que se han tomado en estos cinco o seis meses que, realmente, son muy valorables. Por eso, aunque más no sea de manera muy breve, uno no puede pasarlas por alto, porque considero que conforman verdaderas políticas de Estado. De lo contrario, no lograríamos el acompañamiento de otros sectores políticos.

Creo que esto excede el marco de lo partidario, porque estamos beneficiando a sectores que están esperando que el Estado, por encima de las parcialidades políticas, sean capaces de tener una mirada fija sobre esos sectores que siempre están reclamando con legitimidad y justicia una mejora en sus ingresos.

No voy a dar los detalles técnicos en lo referente a cuántos son los beneficiarios. Creo que se ha explicado perfectamente. Es un número mucho más importante que lo

que inicialmente la gente se imaginaba. Son más de 9 millones de personas que se van a beneficiar con estas decisiones.

Quiero reiterar simplemente que personal, política y espiritualmente me siento muy satisfecho con esta medida que ha tomado el gobierno nacional porque –repito– es un acto de absoluta y estricta justicia social para los sectores más vulnerables.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra el senador Daniel Pérsico.

**Sr. Pérsico.-** Señora presidente: pido autorización para insertar algunos conceptos.

Simplemente quiero decir que soy autor de un proyecto que presenté en 2008 – hace ya unos cuántos años–, en el que, pensando que el impuesto al valor agregado era un gravamen que se aplicaba por igual a los que menos tienen y a los que más tienen, al igual que en esta iniciativa, planteaba la devolución por el sistema bancarizado a los sectores más vulnerables, especialmente a los jubilados y los pensionados. Su aplicación era para los temas de remedios, alimentos y algunos servicios. Por supuesto, con excepción de luz, agua y gas, en los que no se podía. El tope era la jubilación mínima. Si ahora son 6.000, entonces eran mil y pico de pesos. En eso se diferencia con este proyecto. Esta iniciativa la vine representando estos años. La última vez fue en octubre del año pasado. Así que veo con beneplácito que estemos avanzando.

Quiero recordar que cuando lo presenté en su momento, en 2008, hablé con las autoridades de ANSES y distintos sectores. Me explicaron que era muy difícil aplicarse en ese momento porque no había muchos planes bancarizados. Hoy creo que la situación cambió: se ha avanzado mucho en los sistemas de bancarización de todos estos aportes.

Creo que es una medida que apunta a los que menos tienen. Es un trabajo que tenemos que hacer permanentemente.

Como vicepresidente de la comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, quiero decir que también estuvimos hablando de analizar todas las cuestiones tributarias y de hacer una mejora para redistribuir los impuestos. Con beneplácito veo que estamos tomando ese camino.

Como oposición, si bien desde que presenté el proyecto pienso que es una buena medida, con los aumentos que ha habido por devaluación y la inflación, lamentablemente, no va a llegar como quisiéramos que llegue. Recordemos el tema de los aumentos del gas y la luz. No es un gran efecto el que va a tener. Pero por lo menos, de aquí en adelante, estaremos redistribuyendo un impuesto importante y que afecta mucho a los que menos tienen.

Con la autorización para insertar, y no queriendo explayarme sobre este tema, adelanto mi voto afirmativo.

**Sra. Presidente.-** Para una aclaración, tiene la palabra el senador Marino.

**Sr. Marino.-** Quiero hacer una aclaración al senador.

Veo que coincidimos y eso es bueno. Es bueno que en la Argentina empecemos a coincidir.

También tengo un proyecto presentado –creo que muchos de los que están sentados acá los tienen desde hace años– pero no pudo ser tratado, esta es la realidad. No hubo voluntad para el tratamiento. Hoy la voluntad está. Esto creo que va a salir por unanimidad.

Y con respecto al tema tributario –escuchaba a la senadora Durango, de mi provincia–, es bueno decir que todos compartimos el esfuerzo que hacen las provincias argentinas desde hace mucho tiempo para financiar, por ejemplo, la ANSES. Es algo que también durante mucho tiempo dijimos que debería dejar de hacerse y que las provincias deberían recuperar ese 15 %. Está la voluntad política de hacerlo. Durante

muchos años los gobiernos anteriores no quisieron o no pudieron hacerlo. Creo que no pudieron, no que no quisieron.

Y también sobre el tema tributario quiero decir que mi provincia, La Pampa, es una de las pocas a las que el gobierno nacional debe dinero. El gobierno nacional nos debe 4.000 millones de pesos; pero no este gobierno sino el que se fue. Entonces, ya este gobierno empezó a mostrar un signo de que nos está devolviendo algo de una deuda que no generó.

También quiero decir al senador que cuando se discutió la famosa Resolución 125, de las retenciones, fui miembro informante de la bancada de la oposición y justamente uno de los argumentos que expuse fue que las retenciones son un impuesto absolutamente injusto. Después vinieron las compensaciones. De hecho, cuando uno habla de compensar a alguien es porque se le estuvo sacando de más. Si no, la compensación no existe. Y cuando se compensaba, pasaban cosas como lo que sucedió con este pobre albañil de Mar del Plata: se hablaba de cobros de un millón de pesos, y resulta que no era productor...

Además, otra cosa: las retenciones agropecuarias no se coparticipan. Entonces, teníamos un Estado nacional obeso en cuanto a recursos y provincias cada vez más flacas. Este gobierno ya dio un paso con el tema de las retenciones al trigo y al maíz. El próximo paso –sucede que no se puede hacer todo de golpe– será la eliminación de las retenciones a la soja para que vuelva en el impuesto a las ganancias, porque quien más gana, más paga; y quien menos gana, menos paga. Además, se coparticipa a las provincias.

**Sra. Presidente.-** Voy a leer la lista de oradores para ver si la cerramos.

Tengo anotados a los senadores Luenzo, Fellner, Basualdo, García, Giménez Linares, Pichetto –que no sé si va a hablar al final– y Naidenoff. ¿Alguien más? También harán uso de la palabra los senadores Odarda y Rodríguez Saá.

Cerramos la lista de oradores y votamos.

*- Se practica la votación a mano alzada.*

**Sra. Presidente.-** Aprobado.

Tiene la palabra el señor senador Luenzo.

**Sr. Luenzo.-** Señora presidente: nuestro espacio político, obviamente, va a votar positivamente este proyecto; creemos que es la dirección correcta. Es un gesto positivo, un gesto modesto pero positivo al fin, que está marcando un camino. Tal vez el camino ideal sería volver a una discusión que se ha dado durante muchos años en este recinto, que es la devolución a los sectores más vulnerables del 21 % del impuesto al valor agregado, particularmente en la canasta básica, a estos sectores que hoy estamos beneficiando con esta medida.

Quedan algunas observaciones que van un poco en línea con lo que veníamos compartiendo con algunos colegas y tienen que ver, en principio, con el concepto de la bancarización. Hay muchos que todavía no tienen acceso a la bancarización, que no tienen la tarjeta para poder acceder a este beneficio. Esto se puede reparar en función de lo que la senadora aportaba. Creo que en parte ahí hay una respuesta positiva, que es ir dando a los comercios las herramientas necesarias para poder obtener el Posnet del modo en que lo planteó la senadora.

Por otro lado, a veces, también nos encontramos –como en mi caso, en la Patagonia profunda– con poblaciones que no tienen servicio de telefonía. Ahí también estamos en un problema. Yo creo que hay algunas cosas que vamos a tener que resolver porque estamos hablando de los humildes más humildes, de los discriminados más discriminados que tiene el interior de la República Argentina. Hoy, por falta de un

sistema de bancarización, por falta de una instrumentación de carácter electrónico, son casi 277.000 familias. Con lo que enunciaba la senadora Elías de Perez, vamos a avanzar en bajar ese número, pero van a quedar muchos compatriotas sin la posibilidad de poder acceder a este beneficio. También en esto hay que trabajar, me parece, para poder dar una solución. Tal vez, transformar esto en un dinero de manera efectiva. Se verán las formas.

Quería dejar marcado esto porque en el interior hay muchos que no van a poder acceder a esta posibilidad que hoy otros tienen. Por otro lado, también en línea con lo que planteaba la senadora Durango, está el impacto que esto tiene en las economías de cada una de las provincias: más, aquellas que estamos en una situación muy pero muy complicada.

En esto, creo que comparto el criterio de poder avanzar –y habrá que debatirlo–, en ver la factibilidad de que esto surja del aporte del Tesoro Nacional y de que las provincias quedemos excluidas. De lo contrario, vamos a entrar en una negociación. También estaría, tal vez, la opción de la coparticipación del impuesto al cheque. Podemos ver distintas alternativas. Pero, en principio, hay que prestar atención al impacto que esto tiene en cada una de las provincias que, en muchos casos, están en una situación muy pero muy delicada.

Por encima de estas observaciones, insisto, ésta es la dirección correcta. Hemos comenzado el camino de dar a los que menos tienen la posibilidad de poder recuperar algo de la dignidad perdida.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra la señora senadora Fellner.

**Sra. Fellner.-** Señora presidente: naturalmente, y en el mismo sentido que el senador Luenzo, considero que nadie puede estar en desacuerdo con esta iniciativa que beneficia a los sectores que menos tienen. Pero represento a la provincia de Jujuy y también, en el sentido de lo que dijo la senadora Durango, me pregunto si el impuesto al valor agregado es coparticipable o si se les resta también a las provincias.

¡Imagínese! A mi provincia –usted es vicepresidenta de la Nación– ya le han hecho un adelanto de 1.760 millones de coparticipación. Ese reintegro del impuesto al valor agregado ya se lo gastó el gobernador, el Poder Ejecutivo. Ya nos lo gastamos, y de más. Imagínese si encima de eso, es menos lo que vamos a recibir en esto que consideramos una muy buena medida, presidente, una muy buena medida.

En esto, también, ¿cuál es el impacto, como decía el senador Luenzo, en mi provincia? Una provincia de una geografía de montaña en donde usted sabe que la conectividad resulta muy escasa e internet es carísimo. Está la fibra óptica enterrada, pero nos falta ponerla en funcionamiento. Se terminó en diciembre, pero falta que la provincia dé ese paso, junto con la Nación, y tener esta conectividad tan ansiada en todos lados. Hoy, internet en mi provincia, además de ser mala incluso en San Salvador de Jujuy –qué le voy a hablar de la Quebrada y qué le voy a hablar de la Puna– es cara. Además, reitero, el servicio es muy pero muy malo.

¿Cuánta gente está bancarizada? Yo me tomé el trabajo, así como el senador Luenzo decía, de ver la situación en diversas localidades de mi provincia, de las distintas regiones que hay en mi provincia. El Carmen es una hermosa ciudad de Los Diques donde hay turismo y va gente porque están muy lindos los diques. También la menciono por la llegada de gente de afuera, porque generalmente cuando se llega de afuera se llega con la tarjeta. ¿Sabe cuántos comercios hay? Hay 237 despensas barriales que no cuentan con Posnet ni con teléfono fijo, o sea que tendría que ser por internet, a través del celular, que es un gasto más. ¿Y sabe cuántos hay que sí tienen,

que están en el centro de la ciudad de El Carmen? Son nada más que seis con Posnet, presidente, nada más.

Caimancito, nuestra madera. Allí va gente porque tienen una feria y compran mucha madera. Hay 50 despensas barriales que no utilizan nada más que el efectivo. ¿Sabe cuántos minimercados? Solo dos, nada más.

Huacalera. Usted estuvo. ¿Vio qué bonito que es, presidente? ¡Y gracias por visitar mi provincia y estar en Huacalera, un lugar precioso! Hay 20 locales. Llegan muchísimos turistas. Hay 20 locales comerciales y ninguno tiene Posnet. Usted debe haber visto que internet es caro y ni siquiera hay celulares; y estoy hablando de Huacalera, la Quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad, donde llega todo el turismo. ¿Sabe cuánta es la población de Huacalera que tiene acceso a esto, a la pensión más baja, a la asignación universal? El 30 % solamente está “tarjetizado”. El 70 % tiene que trasladarse a otro lado o le llega por correo.

Volcán, comienzo de la Quebrada de Humahuaca, también donde se recibe a todos los turistas. ¡Ni uno tiene Posnet, presidente! Y no es porque la gente está en negro. Hay mucho en negro, pero no es esta la gente de la que le estoy hablando. Es porque la conectividad es malísima y muy cara. El teléfono fijo no llegaba. Ahora ofrecen teléfono fijo. Ahora sí, porque aumentó un montón el teléfono fijo. Entonces, sí: ahora está empezando a llegar el teléfono fijo, pero usted sabe que eso también es imposible.

Maimará, cerquita ahí no más de Tilcara. Hay 70 almacenes; un solo minimercadito con el Posnet.

El impacto va a ser poco, presidente, por lo menos en mi provincia, porque la gente va a tener que gastar en transporte para ir a un lugar donde tengan Posnet, que en general es un poquito más caro que donde no lo hay.

Cuando yo hablaba con estos comerciantes, que son poquitos –no hablé con todos–, la gran mayoría me decía que lo tenían cuando venía gente de afuera, porque la gente del lugar, en mi provincia y en la zona de la Puna, sobre todo, presidente –ninguna de estas localidades es de la Puna; es mucho peor en aquella zona–, vive el día a día. Entonces, al comerciante la plata tiene que entrarle día a día. ¡Y cuando se conocen mucho todavía andan con libretas, presidente! Esa es la realidad de mi provincia.

Yo no sé. A mí me encantaría estar en Tucumán. Parece ser que todo va fantástico. ¡Tienen conectividad por todos lados, con el celular van por ahí!

Estamos hablando de la gente más humilde, presidente, que usted sabe que no vive en el centro de San Salvador de Jujuy la gran mayoría. Viven allá, en mi provincia, en la Puna, en la parte más de adentro de la Quebrada de Humahuaca, en las zonas como Caimancito. Entonces, cuando se habla de “estricta justicia social”, presidente, no estamos hablando de “estricta justicia social”. No va a llegar a todos, por lo menos, ni siquiera en un futuro próximo, presidente, porque hasta que lleguemos a la conectividad plena para que esto tenga su efecto y a la “tarjetización” plena van a pasar unos cuantos años. Esperemos que no muchos, pero seguramente unos años, presidente.

Entonces, adhiero a lo que ha dicho la senadora Norma Durango en el sentido de que este impuesto al valor agregado no se le descuenta a mi provincia. ¡Encima que ya debemos 1.760! Pero tenemos que buscar otra medida, presidente, para que le llegue realmente a aquella gente que está más lejos, que es la que más necesita y a la que no va a llegar esto. Y para que en serio, con el corazón, la frontalidad y el sinceramiento que necesitamos, esta medida sea de estricta justicia social.

Gracias, presidente.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra el senador Roberto Basualdo.

**Sr. Basualdo.-** Indudablemente que todos se han referido a los beneficios del proyecto. Varios señores senadores hemos venido trabajando desde hace mucho para presentar este proyecto, que es integral. ¿Por qué lo veo integral? Yo vengo de un sector que tiene mucho contacto con el comercio chico, al que le tenemos que dar alguna vez herramientas.

El otro día estuve reunido con la cámara de mayorista, a la que pertenezco, pero ahora estoy teniendo con ellos sin querer una discusión, porque decían por qué no acreditamos directamente 300 pesos a todos. Les dije que si se hace eso se va a caer la recaudación. Este proyecto no tiene que tener un costo fiscal. Lo interesante del proyecto es que no tenga costo fiscal.

Más allá de los 31.400 millones de pesos al año, que serían 9 millones por 300 y por 12, si bancarizamos todo el sistema se va a recaudar. Si no hay 300 pesos seguimos con la misma recaudación. La estamos aumentando. Sí tengo que tratar de que no se caiga la recaudación para que no digan que en tal provincia se cayó, en la otra también se cayó. Entonces, tenemos que dar la posibilidad que sea bancarizado.

¿Cuál es el problema que tenía la cámara mayorista? Que les cobraban una comisión. Ahora ya no se las cobran. Además, les deducían retenciones, que al final como eran monotributistas no las podían utilizar. Ya no les hacen esas retenciones.

Sé que está el tema de la falta de tecnología. Pero una vez que se provea la tecnología, también va a recibir el beneficio ese sector, como otros que están más alejados, donde hay más turismo, como en mi provincia. A veces se pierden ventas, pero ahora las van a tener. Tenemos que tratar de que tengan mejor conectividad.

El otro día se trató la ley antidespido. Esta ley también es una ley antidespido, dado que son 31.400 millones de pesos que van a ir al consumo, con lo cual las pymes van a poder generar más trabajo. Esa plata no va al ahorro, no va a un colchón, sino al consumo. Entonces, no tengamos miedo de que se caiga la recaudación porque, en primer lugar, se va a formalizar la economía. Lo que teóricamente se deje de recaudar, por un lado, se va a recaudar por el otro, porque va a haber un crecimiento impositivo. O sea, la recaudación va a crecer. En segundo lugar, también va a crecer la recaudación porque esa plata va a ir al consumo. Se va a pagar ganancias y todo tipo de impuesto y se va a generar trabajo. ¿Cuál es la mejor ley antidespido? La que genera trabajo.

Creo que el proyecto es bueno. Falta la instrumentación para que pueda llegar a todos. Pero la idea es buenísima. No se trata simplemente de acreditar 300 pesos porque de esa forma no se recauda más. Este proyecto tiene que tener un costo fiscal cero.

Si logramos bancarizar todo el sistema también van a poder vender al turista, por más poder adquisitivo tenga. ¿Cuál es el problema que se genera ahora con relación al turismo? En esos negocios, por lo menos en mi provincia, que tiene muy lindos paisajes, no tienen la posibilidad de cobrar con tarjeta y, además, no hay cajeros automáticos para conseguir efectivo. También podemos tener un compromiso en ese aspecto. Van a vender más, vamos a crecer y la recaudación no se va a caer. Si realmente lo hacemos bien, puedo asegurar que en un año y medio o dos –me gustaría que en ese momento conociéramos las cifras–, no va a bajar la recaudación y se va a generar empleo.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra la senadora Virginia García.

**Sra. García.-** En sintonía con lo que han planteado tanto la senadora Norma Durango como la senadora Liliana Fellner, y habiéndolo conversado ayer y en otras jornadas, y habiéndolo definido en el día de la fecha en el seno del bloque, les comunico que vamos a presentar un proyecto de ley –una vez sancionado el que estamos tratando– que complementaría el texto venido en revisión de régimen de reintegro de impuesto al

valor agregado para compra minorista. El costo del programa de reintegro, tal como lo han señalado mis compañeros, asciende aproximadamente a 30.000 millones de pesos, según palabras del ministro de Hacienda. Si calculamos el 45 % del impuesto que es coparticipable, claramente las provincias dejarían de recibir entre 12.000 y 13.000 millones de pesos.

Y nosotros, desde el bloque, nos hemos tomado el trabajo en provincias como la mía, que llegó a un acuerdo con el gobierno nacional por la devolución del 15 %, que sería el 3 % en lo que va del año. De 195 millones, con este programa sufriríamos una quita de 177 millones, con lo cual nuestro “neteo” por parte del Estado nacional sería solamente de 18 millones de pesos para la provincia. Entonces, lo que nos habían prometido por un lado nos lo estarían sacado por el otro. Cuando este debate se dio en Diputados, nuestra bancada del Frente para la Victoria reclamó modificaciones; nobleza obliga, desde el oficialismo y el resto de los bloques y sectores, también se propusieron. Muchas de ellas fueron incorporadas al proyecto original, no solamente en el debate en comisión sino, sobre todo, en la discusión en el recinto, y fueron aceptadas y tenidas en cuenta. Una de las más importantes aristas que, según nosotros, se debía tener en cuenta para que no se hiciera caridad con plata ajena –es decir, para que no pagáramos un excelente programa como es devolverle el impuesto al valor agregado a las personas de los sectores menos vulnerables– era que no lo hiciéramos con la plata de las provincias, porque todos sabemos la situación financiera que están atravesando todas ellas.

De modo que proponiendo que el costo de financiamiento, que la fuente de financiamiento de este programa esté a cargo de recursos del Tesoro Nacional, es que una vez sancionada la ley –entendiendo que no podemos impedir y que no queremos impedir esta ley, sabiendo que es urgente, en la comprensión de que debemos darle sanción porque así lo están esperando estos sectores; igualmente, nos gustaría que tuviéramos la misma celeridad para otros temas–, nos hubiera gustado que se incorporaran más beneficiarios –tal y como se debatió en Diputados–, que se incorporaran beneficios –como señaló el senador Luenzo– para aquellas localidades que tienen poblaciones muy pequeñas. Nosotros habíamos propuesto una modificación para aquellas localidades que tuvieran menos de 5.000 habitantes y que, en esos casos, fuera directo, en virtud de que el sistema de comunicaciones –tal como lo sabe el senador Martínez– no es el mismo el que tenemos en la zona central de la Argentina que el que tenemos en el sur, donde las comunicaciones y el sistema de comunicaciones es diferente. Nosotros tenemos localidades aún no conectadas, razón por la cual decimos que claramente estamos de acuerdo con el proyecto; así lo ha manifestado nuestra bancada en el debate en Diputados. No podíamos menos que estar de acuerdo con la devolución a estos sectores y queríamos incorporar a otros sectores, como a los beneficios del Progresar. Bueno, esas modificaciones no fueron atendidas.

Por otro lado, quiero decir que me gusta que empiecen a incorporar conceptos como el de justicia social, que son parte de nuestro discurso, de nuestra bandera, de nuestro proyecto, de nuestro accionar y de nuestra realidad política permanente. Claramente, igual consideramos que el monto era escaso; también propusimos que se lo elevara porque era solo de 300 pesos. Bueno, se entendió, y la verdad, es absolutamente legítimo lo que se nos dijo como que era el monto que el gobierno nacional podía dar. Como asimismo entendemos que lo estaría dando con parte de los recursos de las provincias, vamos a presentar un proyecto de modificación. Simplemente, cuando la ley esté promulgada, avanzaremos, seguramente con las fuerzas políticas. Y de la misma manera que tenemos el consenso para aprobar esto, también tendremos el consenso



aquí, donde están los representantes de las provincias, para que estas no se vean perjudicadas en sus finanzas. Muchas gracias.

**Sra. Presidente.-** Gracias, señora senadora.

Tiene la palabra la senadora Sandra Giménez.

**Sra. Giménez.-** Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas.

Quiero decirle que realmente echar a andar definiciones institucionales y políticas como la que vamos a votar hoy habla de la responsabilidad con la que oficialismo y oposición tomamos este tiempo de transición, de un modelo político a otro, tratando de que el que se beneficie sea el pueblo argentino en su conjunto.

Por eso, creo que todos asumimos con responsabilidad el debate más serio y el compromiso de hacerlo por unanimidad, así como planteaban desde la presentación del dictamen. Pero hacerlo y votarlo por unanimidad significa comprometernos con una primera etapa de este proceso. Muchos de nosotros hemos tenido también el compromiso de haberlo presentado en nuestra gestión, como en el caso particular del expediente S.-453/14, que fue representado con el número 100/16, y tener en esta oportunidad la posibilidad de decir que los 300 pesos no son poco para aquellos que cobran una asignación familiar. No es poco para aquellas que pertenecen al programa Ellas Hacen. No es poco para los que pertenecen a las cooperativas de Argentina Trabaja. Se trata de aquellos que fueron, de alguna manera, humillados, mal caracterizados, estigmatizados como los “vagos” que cobraban planes, según los comunicadores, el año pasado en plena campaña. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri, gracias a Dios, mantuvo en pie todos y cada uno de esos proyectos. Es más, les aumentó el sueldo; les aumentó la Asignación Universal por Hijo, como lo hizo en marzo para empezar las clases. Esto habla de un aprendizaje compartido, de una responsabilidad compartida. Es por eso que creo que todos vamos aprendiendo en esto de ser oficialismo y oposición.

Comparto con mis colegas de bancada la responsabilidad de marcar, como lo hicimos en la comisión, la necesidad, señora presidenta, de que se articulen las gestiones de gobierno para que las comunicaciones sean más efectivas. La secretaria de Economía dijo que iba a tomar la posta en ese sentido y se comprometió a llevar la propuesta a Comunicaciones para que las antenas de Telecom, que son las que funcionan en nuestra provincia, en Misiones, puedan tener el alcance necesario para que puedan funcionar los Posnet.

También le propusimos al vicepresidente del Banco Central la instancia de que pudieran generar en la primera etapa, a las regiones más vulnerables y menos beneficiadas por la cercanía a la comunicación, Posnet y grandes negocios, los *softwares* en carácter gratuito para la posibilidad de poder incorporar rápidamente a los beneficiarios, tanto a la población a la que está dirigida como a los comercios que no han podido formalizar su incorporación al mundo del mercado de bienes y servicios.

Como no se llega por casualidad, seguimos insistiendo en nuevas medidas. Comparto con la senadora Virginia García lo concerniente a la definición de la nueva propuesta.

También vamos a pedir que se incorpore el retiro del impuesto al valor agregado de los medicamentos de venta libre, señora presidenta. Los medicamentos que son de venta bajo receta no tienen impuesto al valor agregado; pero los que son de venta libre sí lo tienen. Los medicamentos de venta libre, muchas veces, se relacionan con algún tipo de antiinflamatorio o de antifebril que compran las mamás ante la urgencia en una noche de invierno, quizás por algún estado gripal que padezca un hijo, en alguno de nuestros pueblos. Necesitan contar también con ese beneficio.

Lo hemos planteado en la comisión; pero no pudimos lograr modificar el dictamen porque eso significaría volver hacia atrás y no queremos hacerlo. No tenemos que volver a Diputados. Rápidamente en las manos del pueblo debe estar el derecho a este beneficio. Pero sí es necesario el compromiso de continuar trabajando entre todos, tratando de elevar el debate y llevar las herramientas institucionales que le permitan a la sociedad argentina en su conjunto buscar la igualdad de oportunidades y el mundo de derechos con el que todos estamos comprometidos.

Muchísimas gracias, señora presidente.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra el señor senador Jaime Linares.

**Sr. Linares.-** La verdad es que discutir el fondo de esta ley no tiene sentido. Creo que hay un amplio consenso en cuanto a que es una medida justa y, además, me parece que va en línea conceptualmente con el tema de que los alimentos no deberían tener impuesto al valor agregado.

Este tema empezó en la época de Cavallo, en los años 90, cuando pasaron el impuesto al valor agregado de un valor a otro altísimo. La realidad es que siempre ha impactado en los sectores populares, en mayor medida.

El costo fiscal de 30.000 millones de pesos es un número importante, si uno tiene en cuenta o lo compara con las magnitudes. Nosotros, con el senador Abal Medina, a pedido de nuestra gobernadora, hemos estado empezando a trabajar en el tema de la coparticipación, ya que aquí, de alguna manera, subyace el tema de la coparticipación; en general, en todas las provincias.

En la década del 70, nuestra provincia tenía el 28 % de la masa coparticipable; ahora no llega al 20. De manera que tenemos un enorme problema, y en el aporte de este costo fiscal también somos los que vamos a poner más. Por eso me parece que volver a debatir el tema de la coparticipación es esencial para todas las provincias, porque hay provincias que cobran regalías petroleras que no se coparticipan, otras que producimos soja y eso se coparticipa. Entonces, me parece que hay que hacer una revisión importante de este tema.

Esos 30.000 millones de pesos son casi el 7 % de este famoso Fondo del Conurbano Bonaerense, que en su momento...

**Sr. Romero.-** ¿Me permite una interrupción, senador Linares?

**Sr. Linares.-** Sí, cómo no.

**Sra. Presidente.-** Para una interrupción, tiene la palabra el senador Romero.

**Sr. Romero.-** Si bien no es el tema que estamos tratando el de la coparticipación, no puedo dejar de señalar que veo una actividad inusitada de la provincia de Buenos Aires.

No le quito mérito a ninguna provincia, pero esa creencia de que lo que uno aporta debe volver, trajo la desigualdad a este país. Desde 1810 hasta 1860, la provincia de Buenos Aires y esta ciudad usufructuaron la renta de la Aduana argentina; y las demás provincias eran tolderías, como se decía. Entonces, estoy de acuerdo con que cada provincia merece lo suyo y que debemos discutir la coparticipación integral.

En la última década, el gobierno nacional repartía uno de cada cuatro pesos que recaudaba; o sea que el 24 % lo repartía entre las provincias. Por ende, si logramos que la Nación distribuya el doble y que el presupuesto nacional se achique, cada provincia va a tener el doble de recursos y no tendremos que entrar en esa discusión estéril de quitarnos unos a otros.

Todas las provincias merecen contar con recursos. No porque una provincia sea petrolera merece que la castigemos en la coparticipación; no porque una provincia esté cerca del puerto y sea importante debe tener más recursos.

Con esta postura no quiero abrir una polémica. Estoy de acuerdo –porque hace veinte años que vengo presentando proyectos de ley de coparticipación– con la coparticipación, pero tiene que haber justicia para todas las provincias, no solo para la provincia de Buenos Aires.

Pero como veo que se avanza y avanza, quería señalar que es muy difícil que podamos discutir recursos para la provincia de Buenos Aires si no discutimos ese problema con relación a todo el país.

**Sra. Presidente.-** Continúa en el uso de la palabra el senador Linares.

**Sr. Linares.-** Continúo, presidenta.

Comparto lo expresado por el senador Romero. En la última ley importante, que se elaboró en la época de Alfonsín y de Cafiero, la provincia de Buenos Aires quedó con el mismo monto. Pero el doctor Alfonsín, con una concepción claramente republicana y democrática, sacó dinero de la Nación para repartirlo entre las provincias periféricas, que eran las que más lo necesitaban. Entonces, la provincia de Buenos Aires baja en el porcentual, porque quedó con el mismo monto, pero el monto a coparticipar era mayor. Coincido con el senador Romero, y no digo que la provincia de Buenos Aires tenga más recursos, sino que hay que rediscutir cómo distribuimos la coparticipación.

Hacía referencia a los 30.000 millones de costo fiscal porque es un monto importante. También es importante comparar, porque este gobierno se ha comprometido a eliminar el impuesto a los bienes personales. Este año, está previsto recaudar por bienes personales 22.000 millones de pesos; un número claramente importante.

Poner estos números arriba de la mesa implica dar la magnitud y la importancia que tiene, conceptualmente, darles la posibilidad a los pobres de que no se le cobre el impuesto al valor agregado por la compra de alimentos.

También es importante destacar que en este país es muy bajo el uso de tarjetas; es mucho más bajo respecto de cualquier otro país. Este sistema está muy atrasado en la Argentina, y este proyecto, de alguna manera –como me ha manifestado el senador Basualdo–, tiende a incorporar usuarios. Eso nos parece bien. Lo que surge de la conversación que tuvimos días pasados en la comisión, y que de alguna manera subyace en casi todos los legisladores del interior, es la difícil manera de instrumentar el sistema en los sectores más chicos. Hay medidas que son correctas, pero me parece que se van a demorar mucho ante la necesidad que hoy está pendiente en la calle. Comparto con el senador Basualdo, quien manifestó que se va a recaudar más, pero la realidad es que poner en marcha esto nos va a llevar tiempo. Entonces, yo hubiera preferido darles a los beneficiarios los 300 pesos, como le dijeron en su momento al senador Basualdo, mientras se va instrumentando el sistema. No digo que no haya que instrumentarlo, pero nos va a llevar tiempo por el tema del Posnet, del Banco Central, las antenas y todo lo uno pueda agregar en cuanto a lo técnico. Esas son complicaciones que nos van a llevar un tiempo. Me parece que hay necesidades, urgencias, que deberían resolverse más prácticamente.

Lo mismo nos está pasando con el tema de las tarifas, los clubes y las entidades sociales, porque de alguna manera, hasta que se haga el Registro Nacional de Clubes, la angustia que viven estos sectores que trabajan comunitariamente es realmente muy grande.

Entonces, quizá, la forma hubiera sido que las instituciones inscriptas en registros provinciales y municipales, hasta tanto se resuelva el tema de la tarifa social, paguen un determinado monto. De esa forma, se evitaría todo tipo de tensión social.

En síntesis, el proyecto es bueno, va en la dirección correcta porque trata de bancarizar a la mayor cantidad de gente posible y porque disminuye el impuesto al valor agregado en los alimentos, pero, fundamentalmente, creo que debería tomarse una resolución más práctica mientras se resuelven algunas cuestiones técnicas. Es una sugerencia y un comentario porque, de alguna manera, todos estamos preocupados por este tema.

**Sra. Presidente.-** Les comento que deben hablar los senadores Rodríguez Saá y Naidenoff. Vayan avisando para que vengan a votar, porque en un ratito ya estaremos votando.

Senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.-** Gracias, presidente. La ley llamada del IVA, el Impuesto al Valor Agregado, fue una ley peronista, sancionada el 23 de diciembre de 1973 durante el gobierno del general Juan Domingo Perón.

El Poder Ejecutivo envió la norma que establecía el impuesto al valor agregado y, expresamente, los alimentos estaban exentos. Luego, otros gobiernos pusieron el impuesto al valor agregado a los alimentos, algo que afecta a la mayoría de la población en la que hoy hay un 34 % de pobres y otro tanto de indigentes.

Entonces, la norma en consideración viene a remediar parcialmente el tema. Deberíamos abordar en una reforma tributaria la exención del impuesto al valor agregado a los alimentos. Esto es una exención parcial del impuesto al valor agregado; un paso adelante, pero hay que dar otros pasos.

Segundo tema. Leo operaciones en los diarios y todos los días escucho a políticos que hablan de que se va a llamar a los gobernadores para que los senadores votemos de tal o cual manera. La verdad es que lo escucho, aunque no me parece bien lo que dicen. Creo que lo que hay que discutir es la política del país. Y cada uno de nosotros debe votar de acuerdo a sus convicciones y a los intereses del país y de las provincias como corresponde. Tenemos la libertad suficiente para llegar a los acuerdos políticos necesarios. Creo que la norma en consideración va a ser votada por unanimidad o casi unanimidad.

Ahora bien. Pregunto: ¿les consultaron a los gobernadores? Que yo sepa, no. Y ya están interpretando –estamos rendidos antes de que se libre la batalla– que el impuesto al valor agregado se va a sacar de la mitad de lo que les corresponde a las provincias. Ya estamos rendidos antes de tiempo.

La Ley de Coparticipación Federal es una ley convenio según lo establece la Constitución Nacional. Los constitucionalistas argentinos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicen que la ley de coparticipación es una ley supranacional, porque como es un acuerdo de la Nación y las provincias requiere de la voluntad de la Nación y de la voluntad de las provincias. Para modificar la ley se requiere de un acuerdo previo con las provincias.

Entonces, la parte del impuesto al valor agregado que se va a eximir está a cargo de la Nación argentina, que es la que exime el impuesto.

Provincias argentinas: no se rindan antes de tiempo. El gobierno nacional debe afectar de sus recursos del impuesto al valor agregado la parte correspondiente que está eximiendo; si no, debe modificar la Ley de Coparticipación Federal y hacer un acuerdo con las provincias argentinas. Si lo hace en forma arbitraria, ocurrirá como sucedió con el 15 %, que llevó a un fallo de la Corte. Tres provincias argentinas hemos recuperado nuestros derechos gracias a ese fallo, que ha sido aceptado por el gobierno nacional: por el anterior y por este.

Entonces, yo pido que no nos rindamos antes de tiempo. No puede el gobierno nacional afectar los fondos que exime de la parte que les corresponde a las provincias argentinas. Probablemente lo quieran hacer. Y tal vez algún funcionario lo haga. Pero estará en un mal camino; en un error. Tendremos que reclamar y seguramente vamos a triunfar en el reclamo, porque no corresponde que eso suceda.

No ha habido ninguna reunión de gobernadores con el presidente para tratar este tema, y el gobernador de mi provincia –generalmente no hablo de mi provincia, pero hoy lo voy a hacer– expresamente me ha dicho que no acepta que le retiren del impuesto al valor agregado que le corresponde a San Luis la parte que se exime con esta norma.

Me parece que el federalismo lo tenemos que rediscutir. Lo ha planteado el senador Linares a raíz de un problema particular de la provincia de Buenos Aires y lo ha planteado también el senador Romero. Tenemos que discutir la ley de coparticipación federal y el reparto de los impuestos entre la Nación y las provincias, porque el sistema de que la Nación recauda todo y después es el papá bueno que reparte la plata nos ha llevado al fracaso enorme que tenemos con esta Argentina desigual. Lo ha planteado la senadora Fellner, cuando ha explicado que, en su provincia de Jujuy, probablemente, haya muchos pueblos o pequeñas poblaciones en las que no podrá aplicarse este mecanismo, porque no tienen teléfono, el Posnet, tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, habrá una cantidad enorme de argentinos que no tendrá acceso a este beneficio: los sectores más pobres, a los que queremos beneficiar, no se van a poder beneficiar, justamente por la enorme desigualdad que tiene la Argentina.

En consecuencia, tenemos que igualar a la Argentina. Tenemos que tender a la igualdad de los argentinos. Un argentino que nació en el Chaco, ¿es menos argentino que uno que nació en La Pampa, en Mendoza o en la ciudad de Buenos Aires? No; es tan argentino como ellos. Todos tenemos los mismos derechos y tenemos que luchar para que todos tengamos los mismos derechos.

Dejo sentado aquí que voy a votar positivamente esta iniciativa, pero esta norma según la cual el gobierno nacional asume la responsabilidad de eximir de una parte del impuesto al valor agregado a una parte de la población, se debe cargar en la cuenta del impuesto al valor agregado de la parte que se afecta a la Nación sin tocar a las provincias. Nótese que estamos sancionando otra ley para devolver el 15 % de las provincias en cuotas anuales, acumulativas del 3 % y, por otro lado, si fuera cierta la interpretación que algunos senadores han hecho, anticipadamente, se lo estamos quitando con esta norma. O sea, antes de devolverlo, ya se lo quitamos.

Entonces, me parece que debemos actuar con sensatez, con prudencia y defendiendo los intereses comunes de toda la Nación.

**Sra. Presidente.-** Me había olvidado de la senadora Odarda. Le pido perdón, senadora.

Tiene la palabra Magdalena Odarda.

**Sra. Odarda.-** Señora presidenta: voy a adelantar mi voto favorable a la presente iniciativa en la votación en general salvo con relación al artículo 2º, respecto al cual mi bloque va a votar en forma negativa, tal como hiciera el bloque de la Coalición Cívica ARI en la Cámara de Diputados, por entender que existe una delegación de facultades en materia tributaria prohibida por la Constitución.

Por lo tanto, en la votación en particular vamos a expresar nuestro voto en contra relacionado con el artículo 2º del presente proyecto.

Tal como se ha manifestado aquí, uno de los pilares básicos de la lucha contra la pobreza es la política tributaria. Y en este caso el impuesto al valor agregado siempre ha sido considerado uno de los más regresivos por el hecho de que afecta a los más humildes al tocar específicamente la canasta familiar.

**Sra. Presidente.-** Perdón, senadora Odarda. El senador Pichetto le pide una interrupción.

**Sr. Pichetto.-** No, que termine, quería fundamentar el espíritu del bloque respecto de la votación.

**Sra. Presidente.-** Continúa en uso de la palabra la senadora Odarda.

**Sra. Odarda.-** Decía, entonces, que es uno de los impuestos más regresivos porque afecta a los más humildes, quienes, en general, gastan todos sus ingresos en artículos de primera necesidad que están incluidos en la canasta básica de alimentos. Quizás a aquellos que tienen ingresos superiores y cuentan con capacidad de ahorro el impuesto al valor agregado no los toque en forma general, sino en forma parcial. Y allí ya se está dando una vulneración de la Constitución donde habla de que justamente la igualdad es la base del impuesto y todas las cargas públicas.

Si bien este proyecto es correcto y va hacia una dirección positiva en lo que hace a la equidad, nos parece que no alcanza. No alcanza, justamente, porque todos conocemos los índices de pobreza que sufre nuestro país. Y tampoco alcanza porque sabemos que el incremento de las tarifas golpea a las clases más trabajadoras, más humildes. Por eso me parece que el debate sobre tarifas no se puede demorar más en este Senado. Esta Cámara no puede estar ajena a la discusión sobre el tema del aumento de las tarifas en la Argentina.

Quiero decirles que Río Negro, que es la provincia a la que represento, más que un aumento de tarifas requiere una reparación histórica, porque la explotación del gas está destruyendo una de las principales actividades productivas que tenemos, que es la fruticultura, la agricultura. Lo vengo diciendo en cada sesión. Y nos parece que este daño que se está produciendo a nuestra fruticultura debiera ser contemplado y debiéramos tener una tarifa especial para nuestra provincia, que es productora.

Cuando se habla aquí respecto de la fuente de financiamiento de este proyecto, coincido con el senador que me antecedió en el uso de la palabra en que desde ya tenemos que decir que las provincias no sean afectadas en este fondo. Pero también le recuerdo que estas leyes convenio entre Nación y provincia han quedado, lamentablemente, en una utopía si pensamos que por decreto se aumentó la coparticipación de un solo distrito, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del 1,4 pasó al 3,75 % y al resto de las provincias no nos preguntaron qué pensábamos. Y nosotros también, como usted, que representa a la provincia de San Luis, y como los demás senadores, sabemos las necesidades que viven nuestras provincias.

Relacionando esto con las tarifas del gas quiero decir que nuestro gobernador se preguntaba quién iba a hacerse cargo de las tarifas de gas de las escuelas, de los centros de salud y de las comisarías cuando comiencen a llegar las boletas.

Aquí también tenemos que hablar de lo que pasó en la década de los noventa, cuando se transfirió el derecho a la educación y a la salud a las provincias, pero no se transfirió el dinero. Y nosotros nos tuvimos que hacer cargo de todo.

Entonces, ahora, cuando comienzan estos aumentos de tarifas, esperamos que el gobierno nacional nos ayude también para afrontar su aumento en los organismos públicos.

Hay un decreto del Enargas que ha salido recientemente y habla de centros asistenciales y escuelas públicas que pudieran demostrar la necesidad de que se les pague la tarifa. Imagínense lo que gasta de gas una escuela en la Patagonia, por ejemplo. Pero no habla de los establecimientos penitenciarios. No quiero pensar quién va a pagar las tarifas de gas de una cárcel, de un establecimiento penitenciario y de tantos otros organismos públicos. Ni hablar de lo que significa para el sector frutícola, donde el

aumento de las tarifas va a ir al bajo e irrisorio precio de la pera y la manzana. El sector hotelero, si bien ha habido un tope de 500 %, que no es suficiente, ha anunciado cierres y despidos.

Quiero hacer aquí, señora presidente, un pedido muy especial, que es finalizar las obras del gasoducto Cordillerano. Teníamos mucha fe en que se iba a poder inaugurar en los años pasados, pero no se pudo hacer. Son 10.000 familias que están pendientes de conectarse a la red de gas natural y son 10.000 familias que hoy no tienen gas. Y todos sabemos lo que significa el tema de la garrafa, que cuesta 97 pesos, pero en la reventa hay sectores en donde se está pagando hasta 200 pesos.

Por eso, quiero hacer mención –dije que esto no era suficiente– de que vamos en el camino correcto, pero hay muchas otras medidas más para afrontar este gravísimo problema de la pobreza en la Argentina, que no viene de ahora. Todos podemos coincidir en eso.

Quiero hacer mención a un proyecto de nuestro partido que establecía que se debía devolver el ciento por ciento del impuesto al valor agregado de la canasta básica, incluía la Asignación Universal por Hijo, pero también incluía a jubilados y pensionados. Habría que anexarle también los servicios de luz, gas y agua que, a mi criterio, esto corre por mi cuenta, ya deben ser considerados derechos humanos fundamentales, sobre todo porque hoy sin agua y sin gas, en zonas de nuestro país, directamente no se puede vivir.

Por eso, señora presidenta, vuelvo a decir que adelanto el voto positivo en general con esta manifestación relacionada con el artículo 2°.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.-** Sí, presidenta: quiero fijar un criterio en representación de mi bloque. Como bien afirmó el miembro informante, la iniciativa tiene la mirada puesta en los sectores más humildes. Hay un texto que compartimos: pero quiero expresar claramente que vamos a votar el proyecto con la aclaración y el sentido de que nuestro voto va en línea con lo que acaba de expresar el presidente del bloque federal, el senador Rodríguez Saá. Estamos frente a la afectación de fondos provinciales y queremos que quede registrada nuestra posición política en el marco del espíritu de esta ley, porque además va a ser motivo, seguramente, de controversia judicial, con lo cual queremos fijar claramente este tema.

Venimos de una sentencia que la Corte Suprema de Justicia ha dictado en la resolución del caso Córdoba, Santa Fe y San Luis, donde ha sido categórica en orden a que una ley del Congreso no puede violentar lo que significa la coparticipación federal. Y en una ley convenio es imprescindible tener la prestación de conformidad de parte de los estados provinciales. Esto ha sido el corazón del debate y de la resolución de un fallo muy importante que reconoce la cuestión federal en cabeza de las provincias demandantes y que hoy forma parte también de los legítimos reclamos de las otras provincias que están reclamando también la integración; y el gobierno, correctamente, a través de la decisión política que tomó el presidente y el ministro del Interior, ha fijado un criterio de devolución de este 15 % en un proceso en que las provincias han prestado conformidad recientemente en la reunión de Córdoba.

Por lo tanto, queremos dejar constancia de que vamos a votar afirmativamente. Indudablemente, los sectores humildes no tienen por qué estar jaqueados por este debate, pero queremos dejar constancia de que se está violentando nuevamente una cuestión que es de discusión Nación-provincias. Si no se hace cargo la Nación del pago de lo que significan los recursos que se van a eximir en concepto de impuesto al valor agregado a los sectores pobres, seguramente se van a abrir nuevas acciones judiciales, y

lo que queremos es decir que no compartimos los fundamentos de la remisión del proyecto de ley, en orden a que esto tiene que ser tributado por la Nación y las provincias. Consideramos que esto es un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno nacional y que hay que poner en el escenario de la discusión, de ese gran acuerdo federal Nación-provincias esta temática, con las otras cuestiones que hacen fundamentalmente a las cajas de jubilaciones, al sistema de complementación automática de los aportes a esas provincias que se quedaron con las cajas. En fin: hay un conjunto de temas que forman parte de la agenda federal, que me parece que deben ser cumplimentados.

Con este sentido, con este espíritu, y además para que quede registrado en el Diario de Sesiones, para que si mañana hay discusión se sepa con claridad qué es lo que hemos votado, nosotros vamos a votar en general y en particular el proyecto.

Quiero dejar constancia de que también, con posterioridad, los senadores de mi bloque van a presentar un proyecto de ley para clarificar la cuestión que acabo de expresar.

Muchas gracias.

**Sra. Presidente.-** Gracias, senador Pichetto.

Senador Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff.-** Muchas gracias.

Estamos a dos días de que el gobierno de Cambiemos, presidido por Mauricio Macri, cumpla los primeros ciento ochenta días de gestión. Y a poco de cumplir esos ciento ochenta días a mí me parece importante aprovechar esta sesión quizá para hacer un poco el balance de la gestión.

Lógicamente que para hacer un balance primeramente tenemos que tener en cuenta cuál fue el punto de partida...

**Sr. Mayans.-** PBI...

**Sr. Petcoff Naidenoff.-** Pero no para mirar hacia atrás. No, no, yo no soy de los que miran para atrás, porque si miro para atrás –mi querido senador comprovinciano– siempre tengo grabado en la mente lo que significó el año 2001, y a mí me gusta mirar para adelante. Me quiero detener en un solo hecho.

En una Argentina que se asume para gobernar con un 7 % de déficit fiscal, el mayor déficit fiscal que se coteje –por lo menos lo he cotejado– en los últimos veinticinco años de la historia democrática en la Argentina, y en una situación fiscal compleja, así como hay medidas traumáticas, difíciles, yo quiero aprovechar para establecer algunos criterios de lo que se ha avanzado, desde nuestra mirada, desde nuestro bloque, de los que formamos parte de Cambiemos, en estos primeros ciento ochenta días.

Primero desde lo social. ¿Y por qué quiero hacer hincapié desde lo social? Porque nosotros asumimos con la estigmatización de gobernar para sectores privilegiados de la sociedad. Y no solamente se asumió con la estigmatización, sino que también en la campaña electoral se instaló con mucha fuerza, con mucha vehemencia, de actores de la política argentina que tienen responsabilidades concretas, esta idea de “cuidá tu voto, porque podés perder la asignación”; “cuidá tu voto, porque podés perder la pensión”.

Bueno, esta es la Argentina que tenemos; la Argentina en la cual, en la campaña, aparentemente estamos habilitados con una especie de cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Pero el tiempo pone las cosas en su lugar.

Se asumió en diciembre, y desde lo social –porque esta no es una medida aislada, presidenta, por lo menos desde nuestra mirada– quiero quedarme con que en



febrero el presidente de la República amplió las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia y se modificaron las escalas. Cuando las categorías más altas percibían 966 pesos por hijo hasta 7.500 por ingreso de un trabajador, se elevó a 15.000 pesos. Y hoy, 1.250.000 chicos son beneficiarios de esa ampliación.

Pasó febrero, llegó abril, y como el sistema era de alguna manera injusto, y rescatamos la decisión política –no el derecho de autor–, porque, así como en 1973, como bien lo señaló el senador Rodríguez Saá, el general Perón materializó justamente la concreción del impuesto al valor agregado –y no que no estaba destinado a los productos de la canasta familiar–, la bandera de la asignación universal fue una bandera histórica de la oposición, en aquel entonces oposición del gobierno. Me quedo con la decisión de la expresidenta de la República, pero fue a mitad de camino.

En febrero, 500.000 trabajadores monotributistas son beneficiados de esa asignación al igual que 200.000 trabajadores temporarios. Quienes gozaban de beneficios sociales en sus provincias y no podían cobrar la asignación; hoy la pueden percibir.

La situación económica es compleja, es difícil. Lo sabemos y lo asumimos. Pero en el orden de prioridades, cuando la prioridad es lo social, creo que hay que ponerlo en valor.

Escuché a los señores senadores con mucha atención hablar del primer paso de un acto de justicia social. No, la justicia social es un todo, y no se analiza por una medida sino por un conjunto de medidas, algunas son traumáticas, difíciles, claro está, y tienen que ver con la coyuntura, con la circunstancia, con el país que nos toca asumir y con la discusión que tenemos que dar para corregir. Cuando hay políticas que se implementan y que generan dolores, hay que tener la decisión de corregir; y también vamos en ese sentido.

Respecto a esta devolución del impuesto al valor agregado algunos decían: quizá, en una primera etapa, era mejor la devolución concreta de los 300 pesos y no ese mecanismo del débito a través de la tarjeta y con el mecanismo del Posnet. No, lo importante es el débito con la tarjeta magnética, que la primera gran decisión para dejar atrás en parte el clientelismo en la Argentina, cuando el ciudadano pasó a ostentar ese título de tal y no estar sujeto al rehén político de turno para la obtención de un plan social. Y, en segundo lugar, porque combatimos la informalidad.

Así como se planteaba con mucha preocupación, como lo hizo la senadora por Jujuy, esa idea de que perdemos porcentuales en la coparticipación, yo quiero decirles que lo que se pierde se gana en el mercado formal con los ingresos brutos. Tampoco es que se pierde mucho.

Se perdió mucho en lo institucional; y quiero recordar en esta especie de balance, a dos días de cumplir los 180 días de gestión. ¿De qué Argentina venimos? De la Argentina de la imposición, de la Argentina del disciplinamiento, no porque los gobernadores así lo resolvieron sino porque así se dio el modelo. Cada gobernador en su provincia lógicamente que necesitaba obras y recursos. Al compás del modelo se fue acompañando las iniciativas y al compás de ese modelo se fue cediendo en materia de coparticipación. Vaya si se cedió.

Yo también me quiero quedar con ese logro institucional, no con el diálogo; para algunos el diálogo es una palabra menor o romántica, en términos democráticos. Yo me quedo con el acuerdo del gobierno nacional, con el ministro Frigerio, con los veinticuatro gobernadores de provincia para establecer un mecanismo de devolución del 15 % de la precoparticipación que las provincias adelantaron a la ANSES.

Yo me quedo con esa foto de punto de partida de una Argentina distinta en esos 180 días. Porque parecería ser que con la vorágine del día a día hay cosas que pasan de largo. Claro está, venimos de un estilo diferente y hay que reconocerlo, de un estilo de mucha pasión en el día a día, de mucha decisión y de mucha comunicación de lo que se hace.

Venimos de cadenas nacionales. Ese fue el estilo que gobernó la Argentina. No digo que sea malo, digo que es un estilo. Tengo anotadas algunas decisiones políticas que se tomaron en los últimos tiempos. Si hubiera sido la ex presidente quien gobernaba, desde diciembre a la fecha fácilmente habiéramos tenido diecinueve cadenas nacionales. ¿Ustedes saben lo que hubiera significado la reunión de la presidenta con veinticuatro gobernadores para establecer un pacto previo, preexistente, en las provincias y la Nación para avanzar en la devolución del 15 % de la coparticipación? ¿O la ampliación de las asignaciones? ¿O este proyecto de devolución del impuesto al valor agregado lo que hubiera significado?

Entonces, creo yo que en el marco del criterio de estricta justicia social vamos por el buen camino, en una situación difícil. Pero hay que reconocer que la situación es compleja.

Y ante las situaciones complejas hay que valorar el acompañamiento, porque hay responsabilidad de gobierno en este ámbito. Acá se representa a las provincias y acá se late al compás de ellas y de las responsabilidades que tienen los gobernadores.

Este es un primer paso de una deuda mayor que tiene la Argentina. Porque, así como en 1973 el impuesto al valor agregado nació con otro criterio, la tendencia en la Argentina en los últimos años, en materia tributaria, fue a la inversa. No fue avanzar respecto a la progresividad de los impuestos, sino que se tuvo una mirada regresiva, facilista; es mucho más fácil golpear al que menos tiene por la simplificación de la recaudación –como hace el impuesto al valor agregado– y no buscar un sistema tributario equitativo. Y esa no es una deuda del anterior gobierno, sino que es una deuda de la política, que la tenemos que asumir y afrontar.

Yo quiero dar algunos datos para tener idea de lo que hablamos. Si tenemos que comparar la estructura tributaria argentina de 2002 al 2015, el indicador de la presión tributaria desde el sector público consolidado en 2002 rondaba el 18,3 % del producto bruto interno y en 2015 alcanzó el 36,6 %. Es decir que entre 2002 y 2015 se duplicó la presión tributaria en la Argentina.

Y esa duplicación de la presión tributaria recayó fundamentalmente con dos componentes en cuanto a la ampliación de los tributos o de esa masa: primero, en el impuesto a las ganancias, con un incremento del 35 % sobre el total de la consolidación. ¿Por qué en el impuesto a las ganancias? Porque tampoco se reconoció la inflación, y los trabajadores y los sectores medios fueron incluidos; en ese sentido, está pendiente también un debate que tiene que originarse en la Cámara de Diputados para actualizar la famosa tablita. Por eso se amplió.

En segundo lugar, lo que representa el 32 % de esos impuestos que explican la recaudación tributaria nacional lo compone el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que más castiga a los que menos tienen.

Entonces, digo yo: ¿hay deudas pendientes? ¡Enormes! Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como país? Este es un primer paso, y yo creo que este es un primer paso, por la coyuntura económica compleja, con ciertos estancamientos de sectores de la economía, con la necesidad de reactivar el mercado interno, fundamentalmente el consumo.

Pero sin darnos cuenta, estamos dando la discusión tributaria como puntapié inicial, porque 30.000 millones de pesos de devolución directa a través de este mecanismo hacia los sectores que menos tienen o hacia los más vulnerables y que destinan sus ingresos al consumo, sinceramente es una noticia excepcional, no para el presente porque algunos dicen: “Son 300 pesos”. No, no hay que mirar los 300 pesos por beneficiario, sino que debemos mirar el concepto porque este país tiene que salir adelante y la responsabilidad de sacarlo adelante es de todos, con mucha madurez, como lo demuestra el Senado de la Nación.

Entonces, creo que el gobierno, el presidente, debe tomar nota de este puntapié inicial para dar un gran debate que lo tenemos que dar y debemos discutir lo que debe ser una reforma tributaria integral en la Argentina para que la progresividad pueda ser una realidad y para que en ese contexto el impuesto a las ganancias no sea un impuesto al trabajo y poner las cosas en su lugar.

Acá escuché hablar del “Estado papá bueno” y a mí me parece que tenemos que hablar de un Estado responsable y que pone las cosas en su lugar. Y un Estado responsable es este Estado, con estas decisiones en lo social, con estas decisiones en lo institucional, del diálogo y del acuerdo con las provincias, con decisiones en lo económico: la eliminación de las retenciones a las economías regionales, la salida del cepo, la salida del default, que fueron banderas de todos los partidos o todos los frentes que compitieron en la última contienda electoral.

Entonces, en estos 180 días hay que hacer un balance también de las tarifas, claro está, de lo que está pendiente. Pero, ¿sabe qué, presidente? En función de las tarifas y de otras cosas, de un modelo de redoblar la apuesta al modelo de la corrección, apostemos a la corrección.

Y apostemos también a darnos cuenta de que hay que arrancar en momentos difíciles para contener de abajo hacia arriba. Y celebro estas medidas, así como también lo que se está discutiendo en Diputados, porque a muchos jubilados se les va la vida litigando. Y si el Estado va a hacer un esfuerzo fiscal para que a los jubilados se les reintegre lo que se les debe, también es un esfuerzo que tenemos que poner en valor.

Así que, presidenta, podrán quedar materias pendientes, eso está claro; pero quería aprovechar esta posibilidad circunstancial, porque no me correspondía el cierre, a dos días de cumplirse 180 días de gobierno, para señalar algunas cuestiones institucionales, económicas y sociales relacionadas con una fuerte impronta social que acompañamos desde el gobierno.

**Sra. Presidente.-** Quiero hacer una propuesta: si les parece bien, podríamos votar en general y en particular juntamente, salvando el voto negativo de la senadora Odarda en el artículo 2º, así hacemos una sola votación.

En consideración el proyecto. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Resultan 61 votos afirmativos y cero votos negativos.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente*<sup>7</sup>.

**Sra. Presidente.-** Se comunicará al Poder Ejecutivo<sup>8</sup>.

## **7. Entrega voluntaria de armas de fuego (O.D. N° 43/16.)**

**Sra. Presidente.-** Corresponde la consideración de los órdenes del día que por Secretaría se enunciarán.

<sup>7</sup> Ver el Apéndice.

<sup>8</sup> Ver el Apéndice.

## INSERCIONES

*Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos hasta la publicación de la Versión Taquigráfica en internet son las siguientes:*

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PÉRSICO

**Régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado por compras en comercios minoristas. (O.D. N° 270/16.)**

Señora presidente:

El 2 de septiembre de 2008 presenté en esta Honorable Cámara el proyecto 2957/08, que proponía adicionar 10 % más a la devolución de parte del impuesto al valor agregado por compras de cosas muebles para consumo final o para la contratación de servicios que realcen jubilados y pensionados mediante la utilización de tarjetas de débitos que emitan las entidades bancarias.

Digo adicionar 10 % más porque cabe recordar que los decretos 1.387, 1.402 y 1.548 de 2001 establecieron como porcentaje de retribución para la categoría jubilados, planes sociales y asalariados, el 5 % del monto de las operaciones respectivas, que luego fue extendido a todos aquellos que realizasen operaciones con tarjeta de débito.

Es decir, mi proyecto proponía subirse al sistema que rige exitosamente hace 15 años respecto a la devolución del impuesto al valor agregado por compras con tarjeta de débito y adicionar un beneficio especial del 10 % de devolución para los jubilados y pensionados.

Cabe remarcar que la devolución adicional propuesta se realizará sobre todas las compras de cosas muebles y contrataciones de servicios, hasta el monto del haber mínimo jubilatorio establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social, quedando exceptuados del régimen los pagos correspondientes a los servicios de gas, energía eléctrica y aguas regulados por medidor.

El espíritu de proyecto tuvo por finalidad otorgar a los jubilados y pensionados beneficios complementarios a todos aquellos estipulados en la normativa argentina vinculada a la previsión social.

Es importante señalar que se trata de una medida de excepción, apuntada solamente a nuestros mayores, quienes sin duda alguna merecen nuestro respeto y apoyo incondicional, a fin de que puedan proveerse mayor cantidad de bienes útiles para, de alguna forma, mejorar dentro de lo posible su calidad de vida.

Este proyecto caducó y el 10 de octubre de 2015 volví a presentar una iniciativa similar, pero subiendo la devolución adicional al 16 %, de manera tal que se le reintegrara a los jubilados y pensionados la totalidad del impuesto al valor agregado por las compras de bienes y servicios que realizaran con tarjeta de débito, hasta el haber mínimo jubilatorio que define la Administración Nacional de la Seguridad Social.

También, señora presidente, quiero mencionar que en febrero de este año acompañé con mi firma un proyecto del senador Pichetto que proponía un reintegro del impuesto al valor agregado a los jubilados y a los pensionados y, también –y comparto absolutamente–, a aquellos que perciban la Asignación Universal por Hijo o la prestación del programa Progresar, y a los comprendidos en el régimen del personal de casas particulares.

Como menciona dicho proyecto, el beneficio implicaría una mejora sustancial en el poder de compras de las personas beneficiadas, ya que el monto total a devolver, que se volcaría directo al consumo, se estima en 12.512 millones de pesos anuales.

Esa cifra se vería compensada no sólo con la mayor formalidad fiscal que implica bancarizar todas las operaciones, sino que también impactaría positivamente el mayor movimiento económico que se derramaría, producto de este shock de consumo interno.

Entonces, señora presidente, tomados en cuenta estos antecedentes, comparto los lineamientos generales del proyecto del Poder Ejecutivo que hoy estamos tratando.

Pero creo, asimismo, que este proyecto no debería haberse agotado en la devolución únicamente a la compra de bienes muebles, sino que también debería haberse aplicado a la contratación de servicios, excluidos los que mencioné en mi proyecto, como la luz, el gas, el agua, etcétera. Con ello les hubiésemos dado más posibilidades adquisitivas a los beneficiarios.

Por otro lado, me parece poco un reintegro máximo de 300 pesos por mes hasta tanto el Instituto

Nacional de Estadística y Censos publique la canasta básica de alimentos. Si consideramos que el haber mínimo jubilatorio es de alrededor de 6.000 pesos, estaríamos hablando de una devolución del 5 %, aproximadamente. Muy poco, a mi criterio. Será cuestión de esperar a que el Instituto Nacional de Estadística y Censos publique el valor de la canasta básica y ver si, en función de ello, ese monto se incrementa.

Comparto lo que establece el proyecto en cuanto a invitar a las provincias y a Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley para incorporar a los sujetos que cobren prestaciones similares en cada jurisdicción, y espero que mi provincia adhiera a ella para otorgar a los sanluiseños los beneficios enmarcados en el presente proyecto.

Como lo han mencionado los funcionarios que asistieron a la comisión, espero que puedan implementar un sistema de pago con tarjeta de débito de hasta dos cuotas, porque esta posibilidad afectaría de una manera muy positiva a este sector social, que carece de todo tipo de financiamiento.

Por último, por los motivos expuestos y como peronista, que siempre hemos luchado por los intereses de los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente en el gobierno de Néstor y Cristina, que tantas leyes hemos aprobado en favor de los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes, y con las observaciones mencionadas, es que adelanto mi voto favorable al presente proyecto de ley.

2

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI

**Beneplácito por el desempeño de la Dirección General de Publicaciones de este H. Cuerpo, que ha ganado el Premio Nacional a la Calidad 2015. (S.-4.075/15.)**

Señora presidente:

La Dirección General de Publicaciones ha trabajado a lo largo de los años de modo silencioso en el proceso duro de producción y sanción de las leyes. Así, tiene a su cargo la producción del texto original de la Constitución Nacional, la publicación de los discursos de apertura de asamblea de cada 1º de marzo y de asunción de presidentes de la Nación.

Ha participado en la Convención Nacional Constituyente de 1994 como responsable de todas las publicaciones.

Posee al único director parlamentario por concurso en la historia del congreso de la Nación.

Fue ganadora de la Mención Especial de Gestión a la Calidad en el 2014 en los aspectos “Gestión de sus procesos principales” y “Capacitación y toma de conciencia del personal”, siendo favorecida con el premio a la calidad en dicha ocasión la empresa AySA.

Fue ganadora del Premio Nacional a la Calidad 2015, ocasión en la que compitió con importantes instituciones del todo el sector público Nacional.

En el trabajo presentado se muestran los importantes logros obtenidos por la Dirección General de Publicaciones:

- Record de la reducción de error en la impresión de las órdenes del día, de 9,9 % acumulado para la primera reducción a un 2 % en 2015. En la actualidad, luego de la última revisión, se distribuye sin errores.
- Disminución en los tiempos de entrega de la Orden del Día a un promedio de 2,53 días hábiles.
- Disminución del tiempo de confección del Diario de Asuntos Entrados en 5 días.
- Digitalización de los procesos de Orden del Día, Diario de Asuntos Entrados y Publicaciones Especiales en un periodo de 4 años.

En carácter literario se han obtenido los siguientes logros:

- Producción del primer Manual de Procedimientos Parlamentarios en el Congreso de la Nación.
- Producción y actualización del primer Manual de Pautas de Estilo y Composición y Corrección de Documentos Legislativos en la historia del Congreso de la Nación.
- Producción del primer registro de carácter oficial de Publicaciones Oficiales.
- Producción del primer Glosario de América Latina, segunda edición.
- Traducción del Reglamento a distintos idiomas, entre ellos al inglés.
- Primer manual de Procedimiento para la Impresión y Reedición de Obras de Interés del Honorable Senado de la Nación.
- Primera traducción al sistema Braille de la historia del Congreso de la Nación de la Constitucional Nacional, de la Constitución de la provincia de Salta y del Reglamento de la Cámara de Senadores.

Con respecto al personal y a la organización interna:

La furia e impotencia de la población desencadenaron diversas convocatorias en la búsqueda de poner un freno a los casos de violencia de género. Quisiéramos no haber perdido a Ruth, a Natalia y a Micaela, quisiéramos que la lucha por la justicia alcance.

En este sentido, deseo referirme a la investigación que viene realizando el Observatorio de Femicidios en la Argentina, la cual reveló las cifras de femicidios vinculadas a mujeres y niñas en los últimos años: en 2012 hubo 255; 275 en 2013; 277 en 2014 y 286 en 2015. Es decir, muere una mujer cada 31 horas.

En 9 de cada 10 casos de violencia de género, el agresor fue pareja o expareja de la víctima. Un dato desprendido del año 2014 reveló que, de las 277 asesinadas, 39 habían hecho denuncias previas y cuatro poseían órdenes de exclusión del agresor. Además, muchas de estas mujeres convivieron con el atacante, y la mayoría tuvo que denunciarlo más de una vez.

En los últimos ocho años, 2094 mujeres perdieron la vida por violencia de género. Es menester considerar a la violencia sexista como una problemática política, cultural, social y fundamentalmente, de derechos humanos.

La grave situación que viven nuestras mujeres, niñas y niños se debe a un gran problema de nuestra civilización. Nuestra sociedad está transitando hacia una matriz cultural en la que reina el cúmulo de individualidades, donde prevalece el más fuerte y tanto lo material como lo humano son fácil y rápidamente desechables.

El rol del Estado que integramos es clave en cuanto a la responsabilidad de concientizar a la población y garantizar la integridad física y psíquica de las personas. Hago énfasis en esto porque hay una gran cantidad de casos en los que las condiciones socioeconómicas de las víctimas generan que no puedan alejarse de sus agresores o las empuja a caer en redes clandestinas, que lucran con las necesidades.

No podemos esperar más. Por su puesto, mi voto será positivo.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU

**Régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado por compras en comercios minoristas. (O.D. N° 270/16.)**

Señora presidente:

Estamos aquí a fin de tratar una iniciativa que busca devolver el impuesto al valor agregado a una parte de los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde ya, quiero adelantar mi respaldo porque toda ampliación de derechos debe ser reconocida.

He trabajado en este mismo sentido con el proyecto S.-1772/16, que plantea la devolución del impuesto al valor agregado para favorecer la cadena de consumo, las economías regionales, el fortalecimiento de los emprendimientos minoristas y, especialmente, la inclusión social y económica.

No obstante, permítame señalar que he presentado esta iniciativa a fin de paliar la situación adversa que atraviesan los beneficiarios de jubilaciones y pensiones con haber mínimo, de pensiones no contributivas, de Asignación Universal por Hijo o por embarazo. La coyuntura actual, por las políticas de gobierno, no permite que los más vulnerables lleguen a fin de mes.

Esta medida pretende compensar en algún orden la pérdida del poder adquisitivo, que resulta letal para los más humildes de la sociedad. Como ya he reiterado, en mi provincia las facturas de gas superan los 2.000 o 3.000 pesos en los hogares. Familias enteras no cuentan con recursos para alimentar a sus hijos y a diario se enfrentan con la obligación de rescindir una u otra necesidad básica para su subsistencia.

La inflación, los ajustes macroeconómicos, el desempleo y el aumento de la pobreza están destruyendo todas aquellas políticas públicas inclusivas que transformaron nuestra sociedad en los últimos doce años. Sin duda, la devolución del impuesto al valor agregado es un paso hacia adelante, es una herramienta clave y distributiva, pero se da en un marco desesperanzador que pulveriza las economías domésticas. Debemos contener a toda la sociedad, en particular a los jubilados y pensionados.

Señora presidente, adelanto mi voto afirmativo, pero advierto que, sin un cambio de dirección, sin un freno a este ajuste salvaje a las políticas económicas adoptadas, no habrá medida paliativa que alcance.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO

**Homenaje a los protagonistas del levantamiento del 9 de junio de 1956 y a las víctimas de la denominada Revolución Libertadora. (S.-1.925/16 y S.-1.865/16.)**

**Creación de la Comisión Bicameral para la Designación de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. (O.D. N° 239/16.)**

Señora presidente:

Resulta fundamental avanzar en la creación de la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, según lo dispuesto por la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Menores, es el órgano responsable para seleccionar al defensor de niñas, niños y adolescentes.

En un contexto donde niños, niñas y adolescentes ven diariamente afectados muchos de sus derechos y existen graves falencias institucionales para su protección, la figura del defensor cobra aún más importancia para amparar a este colectivo que encuentra muchas barreras para hacer oír sus reclamos.

El defensor de los derechos del niño tiene como función la protección y promoción de los derechos constitucionales de la niñez y posee amplias competencias para lograr ese objetivo. El propio Código Civil y Comercial, vigente desde agosto de 2015, incluyó importantes modificaciones en materia de políticas para niños, niñas y adolescentes, a quienes considera sujetos plenos de derecho, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Protección Integral de los Derechos de Menores, entre otras normas nacionales e internacionales. Para que esta normativa y la ley 26.061 sean efectivas es preciso cubrir el cargo fundamental de defensor de niños, niñas y adolescentes.

Por los motivos expuestos, reitero mi compromiso con esta iniciativa y solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto y podamos prontamente poner en marcha la regularización del nombramiento del defensor de niñas, niños y adolescentes.

8

**SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO**

**Régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado por compras en comercios minoristas. (O.D. N° 270/16.)**

Señora presidente:

Toda medida que posea como objetivo la inclusión de los sectores más vulnerables y la igualdad de oportunidades entre los argentinos debe ser tenida especialmente en cuenta.

Desde ya, confío en que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, la cual dispone el reintegro de un monto no menor al 15 % del total del 21 % que se paga de impuesto al valor agregado a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, logrará aumentar la capacidad de compra de bienes de primera necesidad a quienes más lo necesitan, sin perjuicio de que considero insuficiente el monto máximo de reintegro estipulado en el proyecto venido en revisión.

Entiendo también que la utilización obligatoria del Posnet colaborará con la formalización y el control de los comercios de proximidad y hará posible que las medidas sean llevadas a cabo con la mayor transparencia posible.

Además, la obligatoriedad de dicho Posnet le permitirá al gobierno dirigir la rebaja del impuesto al valor agregado a los sectores que busca proteger, ya que sólo operarán en las tarjetas atadas a las cuentas bancarias en las que se cobran los planes sociales y las jubilaciones.

Ahora bien, esta norma se encuentra destinada a beneficiar a las personas de más bajos recursos, y sabemos que quienes habitan el interior más profundo de nuestra Argentina no poseen a su alcance las herramientas para realizar las transacciones con medios de pago electrónicos.

Entonces, la eficacia del proyecto dependerá en gran medida de la efectiva implementación del sistema electrónico, resultando imprescindible que se realicen campañas de fomento, concientización e implementación para la completa incorporación de los medios de pago que hemos referenciado, a efectos de que sea posible su extensión hasta en los comercios más pequeños.

No obstante ello, como representante de Santiago del Estero, la circunstancia que particularmente me inquieta es la importante merma que se produciría en los ingresos de la totalidad de las provincias.

Sabemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto coparticipable, y la coparticipación, a su vez, constituye uno de los pilares que sostienen al sistema federal que rige en nuestro país de acuerdo a la Carta Magna.

Sin perjuicio de ello, han sido vastos los ajustes que se han realizado en toda la Argentina con motivo de los aumentos en los servicios públicos, que han sido absorbidos por la totalidad de los organismos provinciales, tales como comisarías, escuelas y universidades.

Por último, señora presidente, entiendo que toda intervención del Estado debe estar orientada hacia el bien común, y las alicaídas arcas de las provincias se encuentran al límite para el cumplimiento de sus responsabilidades, razón por la cual no correspondería que los escuetos presupuestos deban soportar las cargas derivadas de la iniciativa propugnada por el Poder Ejecutivo, dado que el presente proyecto no sólo debe promover la justicia social, sino que, además, se debe encontrar al servicio del federalismo, razón por la cual resultaría necesario que la disminución en la coparticipación, que por el impuesto le corresponde a las jurisdicciones provinciales, sea reintegrada de alguna manera por parte de la Nación.

9

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROMERO

**Incorporación del feriado nacional no laborable, en conmemoración del paso a la inmortalidad del general don Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio de cada año. (C.D.-127/15.)**

Señora presidente:

Fueron tres los máximos responsables de nuestra independencia en los campos de batalla: San Martín, Belgrano y Güemes. Ellos confiaron en el coraje y en el patriotismo de nuestros gauchos, indígenas y afrodescendientes que formaron nuestros precarios ejércitos para derrotar a las bien provistas fuerzas que combatían a las órdenes del rey español. Los dos primeros son justicieramente honrados con feriados nacionales, no así el gran gaucho salteño, falencia que se trata de resolver con este validante proyecto de ley.

A Martín Miguel de Güemes lo adornaban las virtudes esenciales, y en él confió San Martín la custodia de la frontera Norte. Ambos diseñaron la guerra de recursos o de guerrillas, que don José había conocido en España durante la resistencia a la ocupación napoleónica, estrategia que permitió acosar, desmoralizar y derrotar a ejércitos experimentados y bien armados. Nuestro Libertador escribió: “Los gauchos de Salta solos están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado”.

Con este día conmemorativo terminaremos con los olvidos existentes, incluso entre bronce y monumentos, y por ello lo que solicitamos es que nos acompañen en la aprobación de este merecido reconocimiento.